

C.A. de Santiago

Santiago, diez de julio de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol C-6640-20 del Primer Juzgado Civil de Santiago, juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios, caratulados “Quiñones con Fisco de Chile-Consejo de Defensa del Estado”, por sentencia definitiva de primera instancia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la señora jueza titular del referido tribunal resolvió:

I.- Rechazar las excepciones opuestas por el demandado.

II.- Acoger la demanda y condenar al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los actores la suma de \$50.000.000, más los reajustes e intereses que indica.

III.- Condenar al demandado a pagar las costas.

En contra de esta decisión la demandada dedujo recursos de casación en la forma y apelación, y los demandantes recurso de apelación.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que la nulidad adjetiva se sustenta en la causal prevista en el artículo 768 N° 6 del citado Código de Procedimiento Civil, esto es por haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, pues estima que la sentenciadora, al acoger la demanda, no consideró que previamente existió una sentencia definitiva firme entre las



mismas partes, por el mismo objeto y la misma causa, la cual rechazó la demanda al acoger la excepción de prescripción extintiva de la acción, decisión que produce el efecto de cosa juzgada, de modo tal que la excepción opuesta por su parte debió acogerse y como consecuencia de ello rechazarse la demanda.

Expone que los demandantes, doña Marcela Edith Quiñones Reyes y don Mauricio Alberto Quiñones Reyes, dedujeron demanda civil en contra del Fisco de Chile en el proceso civil seguido ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-62.547-2008 caratulado “Quiñones con Fisco”, por los daños morales causados por la desaparición forzada de su padre don Juan Luis Quiñones Ibaceta, esto es, por los mismos hechos en que fundaron el libelo de autos.

Agrega que tanto en dicha demanda como en la de autos se interpusieron iguales pretensiones indemnizatorias, basadas en los mismos hechos -y también fundada en las normas internacionales, constitucionales y legales que constituyen el estatuto de los derechos humanos y en aquellas que establecen los sistemas de responsabilidad del Estado-, las que fueron conocidas y resueltas mediante sentencia definitiva y ejecutoriada que declaró prescrita la acción, como lo señala expresamente el fallo de reemplazo dictado por la Corte Suprema.

Por ello estima que en el caso de la especie se dan los supuestos exigidos por la ley, doctrina y jurisprudencia que



habilitan para acoger la excepción perentoria de cosa juzgada y que, en atención a su mérito, debió ser acogida por el tribunal de primera instancia, y haber decidido el rechazo total y absoluto de la demanda de autos, por cuanto esta se ha construido sobre la base de hechos y calificaciones jurídicas que ya han sido rechazados en todas sus partes, por una sentencia judicial previa que se encuentra firme y ejecutoriada.

Manifiesta que la sentencia definitiva ejecutoriada ya dictada en el proceso Rol C-62.547-2008 y que conoció el 30° Juzgado Civil de Santiago, que declaró la prescripción de la acción patrimonial indemnizatoria, produce la excepción de cosa juzgada respecto a la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile impetrada en autos por doña Marcela Edith Quiñones Reyes y don Mauricio Alberto Quiñones Reyes, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se da la triple identidad necesaria, a saber, identidad legal de personas, de cosa a pedir y de causa de pedir, máxime si los hechos en que se funda una y otra demanda son idénticos. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesis.

Aduce en cuanto al perjuicio exigido como requisito de la nulidad del fallo, que este se verifica por cuanto la sentencia de primera instancia rechazó la excepción de cosa juzgada, por considerar, erróneamente, que si bien efectivamente concurre la identidad legal de partes, la identidad de la cosa pedida y de la causa de pedir, tal como lo exige el artículo 177 del Código



de Procedimiento Civil, en el considerando Séptimo y siguientes, hace una distinción, entre cosa juzgada formal y cosa juzgada sustancial, llegando a la conclusión que la excepción alegada tendría el carácter de meramente formal, rechazando en definitiva esta excepción. A mayor abundamiento, agrega que la cosa juzgada alegada, contraría el derecho internacional y la necesidad de reparación a todo evento.

Como consecuencia de lo anterior, se produce un evidente perjuicio al Fisco de Chile pues la sentencia atacada fue dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, que fue alegada y probada en juicio, por lo que al rechazar la excepción se acogió la demanda, condenando de esta forma a su parte a pagar \$50.000.000 en favor de cada uno de los demandantes Marcela Edith Quiñones Reyes y Mauricio Alberto Quiñones Reyes, por lo que el vicio ha influido sustancialmente en lo resolutivo del fallo.

Segundo: Para la adecuada resolución del asunto propuesto es del caso señalar los antecedentes que constan de autos:

- a) Los demandantes de esta causa, Marcela Edith y Mauricio Alberto, ambos Quiñones Reyes, accionan para obtener el pago de indemnización por daño moral por la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses, para cada uno, según demanda interpuesta con fecha 23 de abril de 2020, fundada en la calidad



de detenido desaparecido de su padre, don Juan Luis Quiñones Ibaceta. Exponen que su padre fue detenido por miembros del Comando Conjunto el 23 de julio de 1976 en la vía pública, y posteriormente, se ordenó reabrir el Episodio “Comando Conjunto” en los autos Rol N° 120.133-H, Episodio “Comando Conjunto, Juan Luis Quiñones Ibaceta”, dictándose sentencia en primera instancia con fecha 26 de octubre de 2014, decisión en la cual quedaron fijados los siguientes hechos: *“A).-Que Juan Luis Quiñones Ibaceta pertenecía a la Juventud del Partido comunista (JJCC), al menos desde el año 1968, y, a consecuencia del golpe militar de 1973, comenzó a participar clandestinamente en las actividades partidistas. B).-Que entre los años 1975 y 1976, se formó y operó en esta ciudad de Santiago una agrupación de inteligencia jerarquizada estructura militar, conformada principalmente por efectivos de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA), de Carabineros de Chile (DICAR), de la Armada (SIN) y civiles adscritos a la FACH, denominado Comando Conjunto, y uno de sus objetivos, al tener como colaboradores a 2 ex miembros del Partido Comunista, fue el perseguir, reprimir y dismantelar su organización partidista, por lo que se buscaba, detenía y privaba de libertad*



ilegalmente a sus integrantes, obteniendo información de ellos a través de la tortura, los que posteriormente eran liberados sin cargos o bien se les mantenía privados de libertad en recintos secretos y desconocidos en la época de la detención. Entre los inmuebles utilizados para cumplir con su objetivo se encontraba el ubicado en calle Dieciocho, frente al número 229, que se conociera como “La Firma”, el que fue utilizado como centro secreto de detención entre Marzo y Noviembre de 1976 por esta agrupación de agentes. C) Que en ese contexto el 23 de Julio de 1976, el militante de la juventud comunista Juan Luis Quiñones Ibaceta, estando escondido en la casa de Luis Délano concurrió a una reunión, previamente concertada por un ex compañero apodado “El Fanta”, en calle Balmaceda con Puente Bulnes, donde este le proporcionaría ayuda para salir del país. Al llegar a dicho lugar fue detenido y subido contra su voluntad a un vehículo, siendo trasladado a un cuartel de calle Dieciocho, donde se le mantuvo privado de libertad y desde esa fecha hasta el día de hoy se carecen de noticias de su real paradero”. Fueron condenados por tales hechos agentes del Estado en calidad de autores del delito de secuestro calificado, fallo confirmado por este tribunal en los autos Rol N° 2392-2014 por sentencia de 30 de septiembre de 2015 y rechazados



los recursos de casación por la Corte Suprema en la causa Rol N° 23.572-2015, por decisión de 2 de agosto de 2016.

- b) El demandado al contestar el libelo pretensor opuso la excepción de cosa juzgada sobre la base de lo fallado en la causa Rol C 62.547-2008 el 21 de octubre de 2009, seguida ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Quiñones con Fisco”, por daño moral causado por la desaparición forzada de su padre Juan Luis Quiñones Ibaceta, juicio en que por sentencia de primer grado se acogió la excepción de prescripción de las acciones civiles interpuestas por los mismos demandantes e idénticos hechos. Apelada esa sentencia una de las salas de este Tribunal por fallo de 29 de octubre de 2010, revocó el de primera instancia y acogió la demanda en todas sus partes. El Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo el que fue acogido por sentencia de 23 de noviembre de 2012, dictando sentencia de remplazo que confirmó la de primer grado, que a su vez acogía la excepción de prescripción de la acción y rechazaba en consecuencia la demanda.
- c) Al responder el traslado que le fuera conferido la parte demandante sostiene, en síntesis, que lo alegado corresponde a normas del derecho interno que atentan contra el cumplimiento de obligaciones internacionales



y en contra del acatamiento de los tratados internacionales que regulan la reparación integral de las víctimas y las normas del *ius cogens*.

Tercero: En relación a la excepción alegada la sentenciadora para rechazarla señala: *“Que, analizada la sentencia invocada por la defensa fiscal, se observa que la pretensión de los demandantes fue dada sin un efectivo examen de los elementos que integran la contienda -indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado-, pues se declaró la improcedencia procesal de la acción y se acogió la excepción de prescripción de la acción civil y, por ende, materialmente el conflicto no ha sido decidido.*

En efecto, señala expresamente el motivo décimo segundo del fallo que como se ha acogido la prescripción alegada por el demandado, no cabe pronunciamiento respecto de las restantes alegaciones formuladas, como tampoco cabe pronunciamiento respecto del fondo del asunto.

En consecuencia, no hay cosa juzgada en su sentido material, por lo que no cabe sino desestimar la excepción opuesta”. (Considerando Octavo).

Sin perjuicio de lo anterior, en el motivo Noveno de la sentencia recurrida, en relación a la pertinencia de la excepción de cosa juzgada, fundada en la dictación anterior de una sentencia que revocó la pretensión indemnizatoria del daño sufrido como consecuencia de violaciones a los Derechos



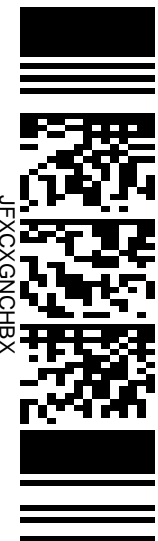
Humanos, transcribe lo resuelto por la Corte Suprema en el fallo emitido en la causa Rol N° 149.250-20, citando al efecto lo siguiente:

“41°) Que el artículo 1° de la de la Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad dos de las obligaciones más importantes que nacen para los Estados partes, estas son, las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados partes, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En consecuencia, la obligación de respetar dicho ejercicio y goce, exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

Por su parte, la obligación de garantizar, exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción, siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

42°) Que, en relación a lo anterior, en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que dicha obligación implica



que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, “la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”

43°) Que, en este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones



internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

44°) Que es un principio general de derecho internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento para su promulgación vigente.

45°) Que la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al derecho internacional de los derechos humanos.

Cuarto: Que, en primer lugar, en el caso de la especie al tiempo de verificar si se cumplen o no los presupuestos del



artículo 177 de Código de Procedimiento Civil, se debe tener especialmente en consideración que los actores demandan indemnización por daño moral, como reparación integral, por la desaparición forzada de su padre en manos de agentes del Estado, responsabilidad que únicamente quedó acreditada en la causa penal Rol N° 120.133-H, Episodio “Comando Conjunto, Juan Luis Quiñones Ibaceta”, fallada por sentencia ejecutoriada dictada en primera instancia con fecha 26 de octubre de 2014, confirmada por una de las salas de este tribunal en fallo de 30 de septiembre de 2015 y desestimados los recursos de nulidad por la Corte Suprema con fecha 2 de agosto de 2016. En efecto, así se desprende del libelo pretensor en que se cita como antecedente el referido fallo penal, y como hechos aquellos asentados en esa decisión, razón por la causa no se verifica la triple identidad que reprocha el recurrente, por cuanto la causa de pedir es diferente.

Entendida la causa de pedir como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, es decir, la razón de la petición que se formula, solo cabe concluir que la pretensión de los actores en esta causa se sustenta en la sentencia penal firme que condena a agentes del Estado como autores del delito de secuestro calificado del padre de los demandantes, la que fue emitida y quedó ejecutoriada con posterioridad a la sentencia dictada la causa Rol C-62547-2008, del 30° Juzgado Civil de Santiago, en la cual la acción se interpuso por la



responsabilidad objetiva del Estado según lo previsto en los artículo 38 de la carta Fundamental y 4° de la Ley de Bases generales de la Administración del Estado.

Quinto: Que sin perjuicio de lo anterior, la cosa juzgada debe ser igualmente desestimada por cuanto el demandado la reclamaba únicamente sobre la base de normas internas las que atentan contra el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado y contra del acatamiento de los tratados internacionales, las que son obligatorias por aplicación del inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece claramente que la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. En efecto, la interpretación pretendida infringe las normas de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que *“El Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales”*, pues al hacerlo, la conclusión alcanzada -no reparación en este caso- necesariamente será contraria al sistema internacional de los derechos humanos, cuando son vinculantes los instrumentos de derecho internacional, siendo obligación del Estado respetar y promover los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra obtener las indemnizaciones de orden patrimonial, como es la que acá se demanda, por cuanto el derecho a la reparación integral de las víctimas y sus familiares importa el resarcimiento



de todo daño al amparo del derecho internacional de los Derechos Humanos por sobre las normas internas que lo harían imposible.

Si en el caso de autos, el Estado de Chile investigó y sancionó penalmente a los autores del delito, antecedente que justifica la acción civil posterior, no procede invocar la cosa juzgada emanada de una sentencia civil anterior para obstaculizar la pretensión iniciada en el año 2020, por cuanto como ya se dijo, se encuentra acreditado por fallo ejecutoriado la existencia de un delito de lesa humanidad que ha generado un daño reparable a los actores en tanto familiares de la víctima.

Sexto: Que a lo anterior se agrega que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 29 de noviembre de 2018, en el fallo Órdenes Guerra y Otros con el estado de Chile, estableció *“La Corte destaca que, tal como reconoció el Estado, el hecho ilícito que generó su responsabilidad internacional se configuró por el rechazo, por parte de los tribunales de justicia nacionales, de acciones civiles intentadas por las víctimas de reparación de daños ocasionados por actos calificados como crímenes de lesa humanidad, con base en la aplicación de la figura de la prescripción, alegada como excepción por el Consejo de Defensa del Estado en representación del Fisco chileno. Tal criterio impidió que los tribunales analizaran en su mérito la posibilidad de determinar una indemnización por los daños y*



perjuicios morales ocasionados a las víctimas, restringiendo la posibilidad de obtener una reparación justa. Es decir, no hay duda de que en este caso las violaciones de derechos reconocidos en la Convención se produjeron por una serie de decisiones de órganos judiciales del Estado que impidieron a las víctimas acceder materialmente a la justicia para reclamar su derecho de obtener una reparación.” Agrega dicho fallo “*La Corte hace notar que las acciones civiles intentadas por las víctimas han sido objeto de decisiones que, hoy día, tienen carácter de cosa juzgada. En este sentido, es claro que el instituto de la cosa juzgada es un principio garantizador que debe ser respetado en un Estado de derecho.*” Pero dispuso igualmente dejar sin efecto las decisiones cuestionadas agregando el citado fallo que: “*En el presente caso, la denegación de justicia surgió por una interpretación judicial contraria a la Convención y la consecuencia de la situación jurídica infringida es que, al día de hoy, las víctimas no han podido hacer efectivo su derecho a reclamar, y eventualmente recibir, indemnizaciones por perjuicios morales alegados por la vía de una determinación judicial. De ese modo, la medida de restitución consecuente con ese daño podría ser disponer que el Estado les garantice el acceso a un nuevo recurso rápido y efectivo de carácter judicial para subsanar dicha situación o, en su defecto, algún mecanismo alternativo que cumpla con esa necesidad.*”



En el caso que se revisa la presente causa se encuentra en tramitación y ello posibilita acceder a la reparación que demandan los familiares de la víctima de un delito de lesa humanidad, motivo por el cual corresponde rechazar la excepción de cosa juzgada, aun cuando este tribunal no comparte lo razonado en el motivo Octavo de la decisión de primer grado, por cuanto conforme a lo reflexionado en este fallo la cosa juzgada no se verifica, careciendo la citada reflexión de influencia lo resolutivo del fallo que se revisa.

Séptimo: Que conforme se viene razonado, el recurso de nulidad por la causal alegada debe ser rechazado.

II.- En cuanto a los recursos de apelación.

De la sentencia en alzada, se eliminan el acápite final del fundamento Sexto, y se suprimen los considerandos Séptimo y Octavo. En el razonamiento Décimo sexto se elimina desde “cantidades” hasta “día de pago efectivo”, reemplazando la coma (,) a continuación del vocablo “demandantes” por un punto (.).

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Octavo: Que como se dijo en el motivo Cuarto de la sentencia de nulidad, en el caso que se revisa no se cumplen los presupuestos del artículo 177 de Código de Procedimiento Civil, ya que aun cuando la identidad legal de persona y el objeto pedido son idénticos, el tercer presupuesto no se satisface en el caso de la especie. En efecto, la acción que dio origen a este proceso tiene por causa lo decidido en los autos



Rol N° 120.133-H, Episodio “Comando Conjunto, Juan Luis Quiñones Ibaceta”, fallada por sentencia ejecutoriada dictada en primera instancia con fecha 26 de octubre de 2014, confirmada por una de las salas de este tribunal por fallo de 30 de septiembre de 2015 y desestimado los recursos de nulidad por la Corte Suprema con fecha 2 de agosto de 2016, es decir decisiones jurisprudenciales posteriores al proceso seguido ante el Tribunal Civil.

Consta del libelo pretensor que los hechos que justifican la demanda corresponden, precisamente, a los que se dejaron asentados en la causa penal, razón por cual la causa de pedir es diferente.

Noveno: Que, por otro lado, y para desestimar igualmente la excepción de cosa juzgada, este Tribunal tiene presente lo decidido por Corte Suprema en el fallo emitido en la causa Rol N° 149.250-20 y lo razonado en los considerandos Quinto y Sexto de la sentencia de casación. En el contexto del derecho internacional de los Derechos Humanos es obligación del Estado no solo prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Viena, sino también la reparación integral de los daños producidos a las víctimas de delitos de lesa humanidad y a sus familiares.

Como ya se dijo, la interpretación pretendida por el demandado infringe el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en tanto prevé que “El



Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales”, pues al hacerlo contraria al sistema internacional de los derechos humanos, que obliga al Estado respetar y promover los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra obtener indemnizaciones de orden patrimonial, como es lo pretendido por los demandantes. Por ello, aplicar la excepción de cosa juzgada haría primar las normas internas haciendo imposible la reparación demandada.

Décimo: Que, en cuanto al daño moral fijado prudencialmente por el tribunal de primer grado, se estima que la avaluación es proporcional al perjuicio acreditado en autos, por lo cual la sentencia no será enmendada en relación a su *quantum*.

Undécimo: Que la suma que se ordena pagar a cada uno de los demandantes será debidamente reajustada de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de ejecutoria de este fallo y su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones reajustables a contar de la fecha en que el demandado incurra el mora, como lo prevé el artículo 1551 del Código Civil.

Duodécimo: Que estimando que el demandado litigó con motivo plausible, no corresponde imponerle el pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en la norma legal citada y en los artículos 186 y siguientes y



765, 766 y 806 del Código de Procedimiento Civil **se declara** que:

I.- Se **rechaza**, sin costas, el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandada contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-6640-2020

II.- **Se revoca** la referida sentencia en cuanto por ella condenó a la parte demandada a pagar las costas de la causa **y en su lugar se declara** que se le exime de dicha carga procesal.

III.- En lo demás apelado se **confirma el citado fallo**.

Se previene que la Ministra señora González Troncoso, sobre la base de los informes psicológicos de los demandantes y teniendo especialmente en consideración su edad a la fecha en que el señor Juan Luis Quiñones Ibaceta fue secuestrado por agentes del Estado, a lo cual se agrega la afectación emocional que para ellos significó la desaparición de su padre, como lo relatan los testigos que deponen en la causa, estuvo por elevar el daño moral a la suma de \$75.000.000, para cada uno de los actores, más los reajuste e intereses señalado en este fallo.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redactó la ministra señora González Troncoso.

N°Civil-18155-2022.-





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez T., Alejandro Rivera M. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, diez de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a diez de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>